ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MARTES 26 DE MARZO DE 2019.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

NÚMERO		IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
22/2016	ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL MENCIONADO ESTADO. (PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS)	3 A 57

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL
MARTES 26 DE MARZO DE 2019**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
EDUARDO MEDINA MORA I.
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

AUSENTE: SEÑORA MINISTRA:

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

**(POR DESEMPEÑAR UNA
COMISIÓN OFICIAL)**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:45 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión. Secretario, sírvase dar cuenta.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de

la sesión pública número 28 ordinaria, celebrada el lunes veinticinco de marzo del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, en votación económica consulto ¿se aprueba? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Continúe, secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2016, PROMOVIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DE DICHO ESTADO.

Bajo la ponencia del señor Ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, secretario. Señora y señores Ministros, como recordarán, el día de ayer iniciamos el análisis del estudio de fondo del considerando séptimo, que se divide en seis apartados; votamos ayer el primer apartado y, sin perjuicio de que los señores Ministros Aguilar y Medina Mora hicieron un pronunciamiento global sobre el proyecto y anunciaron que vendrán reiterando sus votaciones en cuanto al fondo y las consideraciones en cada uno de los apartados, vamos a seguir con la metodología trazada, analizando cada uno de estos seis puntos.

El punto 2 da respuesta a la siguiente pregunta: “¿La eliminación de la posibilidad de otorgar dispensa –en casos graves y justificados– a menores de edad para contraer matrimonio,

constituye una restricción constitucionalmente válida al ejercicio de ese derecho?" Le ruego al señor Ministro ponente Fernando Franco sea tan amable de exponer este apartado.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Presidente. Se da respuesta a la pregunta en las páginas 95 a 122. Al respecto, se indica que de los artículos 30 y 32, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que tanto el sistema interamericano de derechos humanos como el sistema estrictamente nacional permiten que, por razón de interés general o causas justificadas en los ordenamientos correspondientes, existan restricciones o modalidades al goce y ejercicio de los derechos humanos.

De lo anterior debe destacarse que no cualquier razón o causa resulta válida para justificar restricciones o modalidades pues, ante la entidad suprema que tienen tales derechos, el Estado debe velar por su respeto y protección por sobre cualquier otro interés particular o de grupos que resulte insuficiente para justificar la modalidad o restricción respectiva.

En el presente caso, el derecho al matrimonio, tanto a nivel convencional como legal, ha estado restringido siempre por razón de la edad; sin embargo, antes de las reformas que aquí se impugnan, en el Estado de Aguascalientes se establecía como excepción a esa restricción la posibilidad de otorgar dispensas en casos graves y justificados, y es precisamente esa posibilidad de encontrar excepciones la que ha quedado vedada con motivo de

las reformas, quedando, en consecuencia, simplemente la restricción lisa y llana por razón de la edad.

Lo que nos lleva a la siguiente interrogante: ¿cuáles intereses, causas o razones pueden considerarse suficientes o aptas para poder justificar restricciones a los derechos, o en este caso, para justificar la eliminación de excepciones a esas restricciones? Para dar respuesta a esta pregunta, se acude a la elaboración de un test de escrutinio estricto, con base en el cual se llega a la conclusión de que la restricción del caso se encuentra justificada constitucionalmente por las siguientes razones que sintetizo:

Primero, la eliminación de la posibilidad que existía en Aguascalientes antes de la reforma impugnada, de que menores de edad pudieran obtener dispensa para contraer matrimonio, se concluye que cumple una finalidad constitucionalmente válida, pues atendió a lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX-P, y 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al 1º de la Convención sobre de los Derechos del Niño, al 16, punto 2, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; además de las observaciones y recomendaciones formuladas por los órganos internacionales señalados en el proyecto.

Lo anterior, se señala como razón suficiente para considerar que la reforma de las normas impugnadas cumple una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, puesto que, al seguir lo dispuesto en las normas de la Ley Fundamental, las convenciones antes señaladas y las directrices de órganos

internacionales, se persigue proteger el interés superior de los menores de la mejor manera posible.

En este punto se advierte que existen diversos estudios realizados por organismos internacionales, como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –entre otros–, en los que se han evidenciado diversas consecuencias negativas y perniciosas que sufren los menores cuando contraen matrimonio en una edad temprana y se explicitan las consecuencias referidas.

Segundo lugar, por otra parte, continuando con el test aplicado, se llega a la conclusión de que la restricción legislativa que aquí se analiza está estrechamente vinculada con la finalidad constitucional buscada, pues el objetivo de las reformas fue –precisamente– proteger a los menores de las consecuencias nocivas que se describen en el proyecto.

Tercer lugar, asimismo, se llega a la conclusión de que los hechos, actos, personas o colectivos a que se refiere la norma impugnada tienen una protección especial a nivel constitucional y convencional, según se advierte de los artículos 4º, párrafo noveno, y 73, fracción XXIX-P, constitucionales, así como del numeral 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los otros instrumentos internacionales señalados en el proyecto.

Finalmente, se considera que, si bien es cierto que, en el caso, existen otras opciones desde el ámbito legislativo que pudieran

parecer aptas para lograr el fin de protección buscado, como la regulación de un sistema o procedimiento debidamente instrumentado para el otorgamiento de dispensas, lo cierto es que, entre esas dos opciones, se considera que la eliminación de las dispensas es más eficaz para evitar que se coloque, principalmente, a mujeres menores de edad –pero también a los hombres menores de edad– en una situación de riesgo objetivo e inminente que pueda afectar su desarrollo físico y psico emocional derivados de la celebración del matrimonio.

Además, en el proyecto se razona que las repercusiones nocivas que recienten las niñas, los niños y los adolescentes en su desarrollo, salud, educación, independencia y autonomía económica, entre otros aspectos, con motivo del llamado matrimonio infantil, no se subsanan ni dejan de afectar con el hecho de haber obtenido el consentimiento por parte de padres o de un juzgador.

En este contexto, cabe mencionar que, de los datos arrojados por el INEGI, se puede advertir que si bien en nuestro país han disminuido –año con año– los matrimonios infantiles o precoces, lo cierto es que hasta el 2017 –último año en que contamos con estadísticas– seguían existiendo este tipo de prácticas con todo lo que ello conlleva, como los arreglos por razones económicas, sociales o culturales, entre otras, para casar a los menores, hijas e hijos –con mayor incidencia en el caso de ellas– con personas –inclusive– mucho mayores, lo que evidencia que estas prácticas no han sido erradicadas y, por ende, se justifica que los Estados –como Aguascalientes– tomen medidas para contribuir a eliminarlas, en protección de los intereses superiores del menor.

Tampoco se inadvierte que en el contexto social en que vivimos puedan existir menores de edad con una capacidad y desarrollo mental suficientes para entender a cabalidad las consecuencias del matrimonio y que, incluso en circunstancias excepcionales, pueden existir personas que, no obstante haber contraído matrimonio antes de los dieciocho años, no resintieron todas las consecuencias nocivas a que se ha hecho referencia con anterioridad; sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados por los organismos internacionales a que se ha hecho referencia, se llega a la conclusión de que, incluso en esos casos, en mayor o menor medida, el menor que contrae matrimonio se ve afectado en alguno o algunos de los derechos o aspectos que involucran su sano desarrollo o, cuando menos, se le pone en situación de riesgo, lo que justifica que, aun ante la existencia de otras opciones legislativas que pudieran parecer aptas para alcanzar la finalidad perseguida por el legislador, la medida más eficaz para lograr este fin es la que se adoptó al reformar el Código Civil del Estado de Aguascalientes, la cual –debe decirse– no implica la denegación absoluta de un derecho a contraer matrimonio, sino solamente el establecimiento de una edad mínima para acceder al mismo, atendiendo a todas las implicaciones que puede tener su ejercicio. Esto –en síntesis– se plantea en el proyecto, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro Franco. Señora Ministra Norma Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias, señor Ministro Presidente. Mi postura en esta parte del proyecto es estar a favor

del sentido de la propuesta, pero me voy a apartar de la metodología empleada, ya que considero que no era necesario desarrollar un test de escrutinio estricto, ni comparto algunos de los argumentos bajo los cuales se sustenta.

En mi opinión, se debió contrastar directamente la limitación absoluta al ejercicio del matrimonio por parte de menores de edad, derivado de la eliminación de la posibilidad de dispensa, con las disposiciones constitucionales y convencionales que se adujeron vulneradas por parte del accionante.

Considero que es constitucional y convencional la derogación de la porción normativa del artículo 145 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que preveía la dispensa a la edad mínima para contraer matrimonio.

No está en debate en este Pleno que el matrimonio infantil es una práctica nociva; así lo han reconocido los organismos internacionales de derechos humanos en los informes, resoluciones, observaciones y/o recomendaciones generales que se mencionan en el proyecto, los cuales han advertido que el matrimonio infantil obedece a causas que no pueden ser aptas para justificarlo, entre otras muchas, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y de desarrollo, la violencia, los estereotipos de género ligados a la sexualidad y los roles de la mujer, costumbres discriminatorias, así como prejuicios, en relación con el honor o ver al matrimonio como una solución aceptable a determinadas problemáticas: es una práctica – además– cuyas consecuencias perjudiciales, directa o indirectamente, siempre afecta o tiene efectos inhibitorios en el

ejercicio de otros derechos fundamentales de los menores de edad. El proyecto también nos hace una relación de los efectos nocivos que se han reconocido a nivel mundial, particularmente en su salud física, psico emocional, sexual y reproductiva, y en sus posibilidades de desarrollo educativo y social, con miras a alcanzar su autonomía e independencia personal en todos los ámbitos; y que –porque se advierte del proyecto, como lo han presentado los diversos organismos internacionales– esta problemática incide predominantemente en las niñas y adolescentes.

Por ello, considero que, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 4º, párrafo noveno, de la Constitución, de acuerdo con los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las y los menores de edad y acorde con la doctrina que este Alto Tribunal ha venido construyendo en relación con el principio del interés superior del menor, el compromiso del Estado Mexicano, frente al matrimonio infantil, es de prevención y de erradicación.

La posibilidad de celebrar el matrimonio es un derecho; así lo reconocen diversos instrumentos convencionales, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios; –este derecho también se acoge dentro del diverso derecho al libre desarrollo de la personalidad, están ligados los dos derechos– que nuestro sistema jurídico de fuente internacional y nacional además

reconoce, pero que condiciona su ejercicio a que se tenga la edad que la ley interna fije para ello y a que exista el consentimiento libre, pleno e informado de los contrayentes; la dispensa judicial a la edad mínima para contraer matrimonio, como había estado siendo regulado específicamente en Aguascalientes, se realizaba por causas graves y justificadas, y esto se está controvirtiendo en este asunto: que se haya derogado una dispensa por causas graves y justificadas.

Sin embargo, –en mi punto de vista– no era una medida acorde con el deber estatal de protección reforzada de los derechos de los menores de edad; ello, porque no es congruente sostener, por una parte, que el matrimonio infantil es una práctica nociva con efectos también nocivos, que privan, trastocan o ponen en obstáculo el ejercicio de múltiples derechos de los menores de edad y, al mismo tiempo, estimar que sea constitucional y convencionalmente válido permitir que los menores de edad accedan a la vida conyugal, pese a esos efectos y consecuencias en sus demás derechos, bajo la consideración de que existe una causa material que, por resultar de gravedad –a juicio de un juez–, justifique el matrimonio, pues ello supone que éste se realice impulsado por razones de necesidad, en forma obligada o, por lo menos, por causas ajenas a la voluntad del menor de edad, o que necesariamente influyen o determinan la manifestación de éste, esto es, no en el ejercicio pleno de su libre desarrollo de la personalidad, porque tiene que haber una causa grave y justificada –llámese en el ejercicio de su libre desarrollo de personalidad–; esto implica dejar de lado ese deber estatal de protección intensa de sus derechos conforme a su interés superior, pues las afectaciones que trae aparejadas el matrimonio

infantil o temprano, en razón precisamente por la edad, de ahí se derivan todas las consecuencias negativas; no dejan de producirse sólo porque medie una dispensa judicial, de ahí que el Estado no puede validarlas en una norma legal.

Además, no se puede perder de vista que los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen referencia al matrimonio y la legislación interna –en el caso, el Código Civil del Estado de Aguascalientes–, como lo indiqué, exigen como presupuesto jurídico del matrimonio el consentimiento libre y pleno de los contrayentes, incluso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones generales conjuntas –que son la 18 y la 31– aluden a que ese consentimiento debe ser pleno, libre e informado.

El problema del matrimonio infantil, de acuerdo con los instrumentos y documentos emitidos por los organismos de derechos humanos que se invocan en la propuesta en el proyecto, exige, además, que este Tribunal Pleno analice la validez de la norma controvertida con perspectiva de género, pues de esa fuente se constata –sin lugar a dudas– que quienes son sujeto de esas prácticas son, en mayor medida, las niñas y adolescentes, y son ellas quienes sufren el impacto más significativo de las consecuencias nocivas del matrimonio temprano, el que sigue realizándose a partir de costumbres y conductas discriminatorias hacia la mujer y estereotipos de género, advirtiéndose el apremio de eliminar el matrimonio infantil por parte de esos organismos con mayor énfasis para proteger los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente aquellas que viven en condiciones

de vulnerabilidad por extrema pobreza, violencia por poca o nula instrucción y las menores de comunidades indígenas.

Es cierto que el artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios alude a la posibilidad de que exista la dispensa judicial a la edad mínima para contraer matrimonio; sin embargo, –como lo expresé en la sesión de ayer– considero que esa norma no tuvo como propósito reconocer una prerrogativa fundamental a favor de los menores de edad, pues se hizo referencia a ella sólo como una salvedad, lo cual –incluso– se analiza del preámbulo de la Convención, donde se establece que se debe erradicar el matrimonio infantil.

En ese sentido, es posible entender que esa disposición establece una facultad potestativa, reservada a cada Estado parte, para que en su legislación interna, conforme a su libertad de configuración, determinara si, de acuerdo con su contexto nacional, era viable o no prever dispensa a la edad para contraer matrimonio, pero no establece una obligación o un deber para los Estados parte de prever excepciones para que se permita el matrimonio de menores de edad.

Tampoco desentendiendo que puede haber algún pronunciamiento de los comités de derechos humanos referidos, en el que se haya aludido a esa posibilidad de dispensa para el matrimonio de menores de edad; concretamente existe una recomendación, que es la Recomendación General núm. 31, –que se cita en el proyecto– en la cual, en uno de sus párrafos establece la posibilidad, pero la establece diciendo: siempre y cuando el niño

tenga como mínimo dieciséis años de edad, y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales, legítimos, definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición.

En este sentido, atendiendo a la realidad que vive nuestro país y a las obligaciones que se han contratado por el Estado Mexicano, a la interpretación que le doy al artículo 2 de la Convención referida y a una ponderación de principios establecidos constitucionalmente, considero que debe ponderarse, como de mayor entidad, la protección reforzada al cúmulo de derechos de los menores de edad que se ven afectados con el matrimonio infantil, para estimar constitucional y convencional la eliminación de la dispensa, pues –insisto– el compromiso del Estado Mexicano es erradicar dicha práctica nociva, particularmente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad de nuestras niñas y adolescentes.

Por estas razones, –aunque comparto el sentido del proyecto– me apartaré de las consideraciones y, en su oportunidad, haré un voto concurrente. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Ministro González Alcántara.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero agradecer al Ministro ponente su excelente proyecto y, sobre todo, haber dado lectura y tomar en cuenta los tres puntos fundamentales que le presenté en una nota por escrito; sin embargo, me reservo el derecho a emitir un voto concurrente para desarrollar esas razones y argumentos,

una vez que haya revisado el engrose; simplemente, me gustaría reafirmar –porque veo a otros Ministros cómo lo han hecho– que difiero de la metodología seguida en este apartado 2 del estudio de fondo.

Creo que si siguiéramos una interpretación sistemática, como la prescrita por la Convención de Viena, para leer el artículo 2 de esa Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio –como efectivamente lo propone el proyecto en el apartado previo–, podríamos –desde ese momento– desestimar el argumento de la promovente y abandonar la terminología de restricción constitucionalmente válida; eso es así porque no debe existir un derecho a la dispensa, ni tampoco un derecho para que los menores contraigan matrimonio, y no deberíamos hablar de restricciones. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ministro. Señor Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, señor Ministro Presidente. Voy a ser muy breve: únicamente para sumarme a la posición que el día de ayer manifestó, en este punto, el Ministro Luis María Aguilar y que hoy ha desarrollado con otras consideraciones –también– la Ministra Norma Piña.

Creo que –efectivamente– en este caso no era necesario hacer el test de proporcionalidad que se realiza en el proyecto, con la preocupación de que no solamente es una cuestión de necesidad –digamos– si sobrara, pudiéramos decir: bueno, sobre el test. El problema es que, conforme a los precedentes de este Máximo Tribunal, el test de proporcionalidad es una metodología para

analizar medidas legislativas que intervienen en un derecho fundamental, y el de escrutinio estricto es cuando se apoyan en una distinción, en una categoría sospechosa y que, entonces, procede –precisamente– hacer esa distinción.

En este caso, –curiosamente– el sujeto es el mismo, en sus dos derechos o sus dos vertientes, –digamos– es el menor de edad frente al libre desarrollo de la personalidad o su capacidad de decidir y por el otro lado, la protección como menor de edad; por lo tanto, convergiendo los dos, no aplica esta metodología y, además, por las razones que se expusieron. Estamos ante una derogación del artículo 145 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que hablaba de “causas graves y justificadas”, como el proyecto lo menciona en su página 120; eso no iba dirigido al interés superior del menor, estaba hecho para solucionar, con el matrimonio infantil, ciertas problemáticas, entre otras, la del embarazo precoz o el embarazo de menores de edad.

Además, considero –creo que en eso coincidimos– que, dentro de los derechos que abarca el principio del interés superior del menor, no se encuentra el derecho al matrimonio, sino que –como ha sido desarrollado por quienes me han precedido– es una medida de protección reforzada –precisamente– hacia los menores de edad. En esa tesitura, corresponde analizar esa ponderación entre los riesgos y los perjuicios del matrimonio infantil frente a la elección o esa opción que pudiera tener el adolescente, y el legislador consideró que los riesgos y perjuicios de esta restricción que –además, recordemos– es temporal porque lo único que exige esta legislación es esperar un año, un año y medio dos años, para poder celebrar ese matrimonio y, por las

mismas razones –además–, no se priva al menor de todos esos derechos que tendría desde el punto de vista –mencionaba la accionante fiscal–: del derecho al nombre, del derecho a la personalidad, del derecho a la pensión, a los alimentos, porque eso no tiene que estar forzosamente ligado a un acta de matrimonio, sino que esos derechos son inherentes al menor por el hecho de ser persona, independientemente de que los padres estén casados o no. Por eso, también me separo de la metodología en este punto, con un voto concurrente. Gracias, Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro Laynez. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Como ha quedado registrado en el tratamiento del punto anterior, en donde se cuestionó la convencionalidad de la disposición que es motivo de esta acción a partir de suprimir la posibilidad de autorizar, por causas excepcionales, un matrimonio entre menores de dieciocho años, y mi posición de su inconvencionalidad; vencido por la mayoría y, dado que el proyecto apunta hacia otras tantas defensas, es que me pronuncio sobre el resto de los conceptos de invalidez; lo hago orientado – básicamente– por el criterio sustentado por esta Suprema Corte en la contradicción de tesis 293/2011, en la que claramente se dejó dicho que una restricción constitucional supera cualquier otro derecho, por favorable que resulte, derivado de un instrumento internacional o de la ley. Sin embargo, quedó claro que, al constitucionalizar los derechos contenidos y reconocidos en los tratados internacionales, estos adquieren el nivel de la

Constitución, convirtiéndose, con ella, en la supremacía referencial del orden jurídico mexicano. Mi aproximación al tema –que aquí se trata– participa precisamente de lo expuesto por quienes me antecedieron; no estoy de acuerdo con la metodología, pero sí con su resultado.

La expresión que hago es a partir de lo que manifesté: si esta disposición es inconvencional o esta derogación es inconvencional, tendría que revisar si el texto constitucional establece una restricción al derecho de vivir una persona con otra; la libertad para decidir con quién hacer familia, con quién integrar un matrimonio es indiscutiblemente protegida por la Constitución, mas ésta no restringe la posibilidad de que esto acontezca entre personas menores de edad, y en tanto no hay una restricción expresa –como se definió en la contradicción de tesis a la que me he referido–, el contraste no radica en encontrar la inconstitucionalidad a partir de una restricción expresa. Pero si existe en la Convención –como lo expresé en su momento–, mi conclusión a este ejercicio es: simplemente, no hay punto de contraste con la Constitución, pues ésta no fue desarrollada y así limitada por el Texto Supremo y, si esto no existe, entonces el concepto de invalidez –a mi juicio y consideración– resulta infundado, pues el examen de regularidad constitucional no radica en la contrastación del tema aquí cuestionado por la Legislatura local en contra de la Constitución; está resuelto –a mi manera de ver– por la Convención, y esto llevaría a la declaratoria de ser infundado el concepto de invalidez pues, reitero y concluyo, no existe restricción constitucional para tales efectos; si la hubiera, ese sería el parámetro de referencia; al no haberlo, el que sigue –

en grada— es el de la Convención y, al existir esto, lleva a una conclusión que expresé. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ministro. ¿Algún otro comentario? Señor Ministro Pardo.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias, muy brevemente, señor Presidente. Coincido con quienes han expresado su opinión en el sentido de separarse del test que contiene el estudio que analizamos, me parece que la argumentación debiera ser sobre la base fundamental de la protección reforzada que existe en derecho internacional para proteger los derechos de los menores, el interés superior de los menores y, desde esa perspectiva, hacer la ponderación y el análisis respectivo para concluir con la validez de la norma cuestionada, así es que me sumaría a las opiniones que se han expresado tanto por la Ministra Piña como por el Ministro Laynez y, en ese sentido, sería mi voto. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Algún otro comentario? Voy a expresar mi opinión. Comparto el sentido del proyecto, pero no las consideraciones con base en las cuales se llega a la conclusión de que la eliminación de las dispensas para que los menores de edad puedan contraer matrimonio es una medida válida.

Para resolver la cuestión planteada, el proyecto recurre a un test estricto de constitucionalidad, metodología que —a mi juicio— no es la adecuada, toda vez que la eliminación de las dispensas, en

tanto es constitutiva de una prohibición absoluta al matrimonio de menores de dieciocho años, no debe analizarse como una restricción al derecho al matrimonio, ni tampoco como una medida que discrimine con base en una categoría sospechosa, como lo es la edad.

El derecho al matrimonio —por definición— está sujeto a una edad mínima; el establecimiento de tal edad, lejos de constituir una medida que limita el derecho, es un elemento que lo configura, lo define; el establecimiento de la edad mínima es parte inherente del derecho al matrimonio y, en este sentido, no puede sujetarse a un test estricto, porque no existe una presunción de que el señalamiento de la edad, sea discriminatorio; por el contrario, la edad mínima es un elemento fundamental del derecho al matrimonio, cuya finalidad es proteger a quienes no están en aptitud de dar su consentimiento para un acto jurídico de tal trascendencia.

En ese sentido, respecto al establecimiento de una edad para el ejercicio de ciertos derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, ha determinado que este trato diferenciado no es *per se* discriminatorio, sino que “sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos” de la infancia y, en este sentido, el trato diferenciado debe tener una justificación objetiva y razonable.

Así, la metodología del escrutinio estricto, cuya razón de ser se funda en una presunción de inconstitucionalidad, no resulta aplicable cuando se analiza una medida diseñada en beneficio de

categorías vulnerables, pues su lógica es, precisamente, la de protegerlas; en estos casos, se debe someter la norma impugnada a un simple estándar de razonabilidad.

Dicho estándar se satisface, en el caso que nos ocupa, porque la edad de dieciocho años es la que tanto en nuestra legislación interna como en el derecho internacional de los derechos humanos marca la distinción entre la infancia y la edad adulta, y si bien no cabe duda de que algunos adolescentes pueden tener la madurez necesaria para tomar una decisión como la de contraer matrimonio, ello no obliga al Estado a definir, caso por caso, la capacidad de un niño para acceder a esta institución jurídica, cuando la finalidad general que se persigue es la protección, sobre todo, de las niñas.

En efecto, no debe perderse de vista que con esta prohibición absoluta se busca erradicar el matrimonio infantil, precoz e, incluso, forzado. Como está ampliamente documentado, tales matrimonios ponen en riesgo el ejercicio de los derechos de las niñas, como el derecho a la educación, salud, vida, libertad y autonomía. Las niñas casadas –con frecuencia– abandonan sus estudios, se ven expuestas a una mayor vulnerabilidad y dependencia económica, un riesgo más alto de sufrir embarazos adolescentes, los cuales pueden implicar una amenaza a su vida, violencia y limitaciones en su libertad y autonomía.

En este punto, quiero enfatizar que me refiero a las niñas porque la cuestión del matrimonio infantil debe analizarse –necesariamente– desde una perspectiva de género, la cual permite identificar patrones muy claros de discriminación en su

contra; para ello, debemos recurrir a los datos que demuestran que el matrimonio infantil en México, primero, es un fenómeno frecuente; segundo, que afecta en mayor medida a niñas que a niños; tercero, que impacta principalmente a niñas de un menor nivel educativo; cuarto, que se presenta, en mayor medida, tratándose de niñas que viven en pobreza; y quinto, que se concentra, en mayor medida, en zonas rurales e indígenas. Todos estos son datos publicados por ONU Mujeres México.

Frente a esta realidad, es claro que la medida consistente en eliminar la posibilidad de dispensas, por más que en el derecho internacional sean admitidas en casos excepcionales, es una medida apta y proporcional al fin que se persigue: proteger, de manera robusta, los derechos de las niñas y adolescentes.

Ahora bien, debo insistir en que todo esto no implica que las adolescentes no tengan una autonomía progresiva, la tienen, pero el hecho institucional del matrimonio puede regularse de manera que sólo los adultos tengan acceso a él, porque con ello se busca proteger a las niñas.

Una prohibición absoluta a los menores de dieciocho años para conocer matrimonio –definitivamente– elimina el margen de error en el que podrían incurrir los jueces al momento de otorgar dispensas, máxime cuando no debe perderse de vista que actúan en un contexto social, cultural determinado, en el que podría dificultarse que resolvieran con perspectiva de género y atendiendo al interés superior de la infancia. De esta manera, comparto el sentido del proyecto, pero por las razones que he expresado. ¿Algún otro comentario? Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. No sé si alguien más va hacer uso de la voz.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Gutiérrez.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: No pensaba hacer uso de la voz, pero recapacitando por la petición que hizo el otro día para efectos del engrose, quiero dar mi punto de vista.

Estoy sustancialmente de acuerdo con el proyecto, me aparto de algunas cuestiones:

Primero, no creo que estamos hablando del matrimonio infantil, es decir, inclusive, la ley derogada de Aguascalientes limita la dispensa a los catorce años; segundo, tampoco creo que estemos discutiendo si se debe modificar la edad del matrimonio, inclusive, la ley derogada de Aguascalientes tenía como edad mínima dieciocho, podía existir alguna dispensa; tercero, no creo que sea correcto hacer un análisis en el proyecto, donde se compara esta figura que establece como prohibición mínima absoluta –dieciocho años– y la ley derogada, no estamos analizando la ley derogada.

La ley derogada podría ser por causas justificadas, por causas graves, podría ser inconstitucional también, pero quiero dejar claro –desde mi punto de vista– que no considero que éste sea un precedente que me permita o me atañe a votar de cierta manera; si alguna otra legislatura establece una dispensa y esa dispensa – desde mi punto de vista– pudiera resultar ser constitucional;

insisto, estamos analizando si la prohibición absoluta de los dieciocho años es constitucional o no, no estamos haciendo comparación de la ley derogada y creo que nadie está contemplando la reviviscencia del artículo 143 anterior; entonces, acotando mi voto, creo que está en libertad configurativa el Estado, está permitido dentro de los tratados, el establecer una prohibición absoluta de los dieciocho años. Eso no quiere decir que una dispensa bien hecha o que esté dentro de los márgenes de lo que se permite a nivel internacional no pudiera ser – también– constitucional, sin pronunciarme sobre el artículo 143 derogado de la ley de Aguascalientes.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministro Gutiérrez. Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Un brevísimo énfasis – nada más del que había dicho– en este punto segundo: reitero que no estoy de acuerdo con lo del test de escrutinio estricto; para mí, la solución, como la expuse el día de ayer, se trata de un problema cuya solución implica la delimitación de la libertad para formar una familia –en este caso– a través del matrimonio, nada más. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministra Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Gracias. En los diversos instrumentos internacionales se alude al matrimonio infantil o de temprana edad respecto de aquellos menores que no tienen dieciocho años, por eso –lo explica el proyecto– habla de

infantil o temprano, menores de dieciocho años, así está catalogado.

Pero, además, creo que este asunto lo tenemos que enfocar en el sentido que, entendí, así lo estaba presentando el Ministro Franco.

Lo que sucedió fue que en la legislación del Estado de Aguascalientes se establecía esa dispensa.

La edad de dieciocho años –como también lo dice el proyecto– fue reformada con anterioridad, entonces no se ejerció acción de inconstitucionalidad en contra de subir la edad, o sea, la ley establecía que no se podía contraer matrimonio con menores de dieciocho años, y eso no es motivo de análisis porque no fue impugnado en tiempo –y así lo dice el proyecto–. Lo que estamos analizando es: ¿qué sucedió? Quitó la dispensa, entonces, lo que estamos analizando no es la edad del matrimonio, sino si una prohibición absoluta de contraer matrimonio, sin dispensa alguna, es constitucional o no.

Así creo que se enfocó como una prohibición absoluta pero, como duda, lo presento para oír al Ministro, digo, en relación con lo que decía el Ministro Gutiérrez; por eso lo pregunto, porque creo que es un enfoque diferente a como estamos analizando el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A ver, Ministro Gutiérrez.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Efectivamente, dije que no se modificó la edad, la edad es de dieciocho años, lo que estamos analizando es la dispensa. Ahora, eso no quiere

decir que, llegado el caso de analizar una dispensa, pudiera cumplir los parámetros de constitucionalidad —desde mi punto de vista—, considero que éste es constitucional, no me pronuncio sobre cuando tengamos que analizar una norma que tenga una dispensa.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Desde mi punto de vista, estamos hablando de matrimonio infantil, porque menores de dieciocho años son niños —de eso estamos hablando—; no estamos hablando de matrimonio infantil de niños de ocho años, pero estamos hablando de matrimonio infantil, para mí eso es clarísimo y por eso viene a cuento lo de la dispensa y la protección o no a los niños. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Muy brevemente. En primer lugar, aprecio muchísimo todas las opiniones vertidas, es evidente que hay una mayoría —hasta donde alcancé a entender de todo lo que se dijo— no en contra de los argumentos, sino del test que se hace porque, prácticamente, lo que escuché —de alguna manera— está señalado en el proyecto, de los argumentos.

Ahora, voy a defender el test por las razones que voy a dar, y no me voy a meter en discusiones porque, efectivamente, —aquí— se cuestiona si puede existir el matrimonio de menores o no, y hay varias cuestiones que podrían gravitar, pero eso se está discutiendo, ¿por qué voy a sostener el test? Tuve muchas dudas —inclusive— personales, de irme por este test o simplemente por un contraste.

A ver, en primer lugar, en el proyecto se señala —claramente— que ninguna convención; para empezar, la Constitución —como bien se ha dicho— no habla del matrimonio —nuestra Constitución—, lo hemos planteado a partir de la interpretación del artículo 4º constitucional y —precisamente— de una doctrina internacional, pero no hay mención explícita del matrimonio, se eliminó con la reforma de mil novecientos noventa y dos al artículo 130 constitucional. Esa es una primera cuestión.

Entonces, estamos en un ámbito esencialmente convencional, que se suma a lo reconocido en nuestra interpretación constitucional que la Constitución establece como un derecho y las convenciones, por supuesto, lo hacen: el matrimonio.

Entonces, ¿qué está planteado? —esto es lo importante para mí— Efectivamente, había un texto legal que permitía las dispensas y —con el mayor respeto— establecía una edad para el matrimonio infantil o de menores —que era catorce años—, ha habido otros Estados en que se establecían dieciséis, inclusive uno que estableció diecisiete, hoy han modificado todo eso en función de la ley general que tenemos. Entonces, había una edad.

Aquí el problema es que el planteamiento que se hizo, desde su origen por quien presentó la acción fue, entre otras cosas, que —precisamente— había una aplicación que impedía que los menores —que antes podían— celebraran un matrimonio bajo ciertas condiciones establecidas en el sistema convencional, que está autorizado, efectivamente, por este convenio que rige los matrimonios, y que no prohíbe —como se ha dicho— que pueda haber dispensas; no sólo eso, dice que las puede haber, coincido

en que esto no es obligatorio para los Estados, pero dice que las puede haber, y el Estado de Aguascalientes aplicó, precisamente, lo consideró un derecho por su libre configuración, para señalar que podía haber, en casos graves o excepcionales, el matrimonio de menores.

Entonces, se estaba considerando en el planteamiento que había una afectación a un derecho que existía, conforme a esa norma convencional que plantea.

Segundo lugar. El proyecto claramente dice que los matrimonios, en el ámbito convencional, los matrimonios de menores no están expresamente prohibidos, en ningún texto de las convenciones se dice; ha sido la doctrina interamericana de los organismos internacionales, que aplican estos instrumentos, los que han venido definiendo que no debe haber menores que puedan acceder al matrimonio formalmente.

Consecuentemente, la conclusión a la que llegué fue que, efectivamente, ante los planteamientos formales planteados y ante la condición objetiva de los planteamientos, había que hacer un test para efectivamente ver, dado que no tenemos una disposición expresa en la Constitución, si esto afectaba en mayor o menor medida a los menores; creo que es la labor que hace el Tribunal Constitucional.

Dicho esto –señor Presidente–, sostendré el proyecto. Sostengo lo que ofrecí: si a raíz de la votación no se lograra una mayoría con más de cinco votos, me sumaría a quienes hayan votado, en función, –creo que la va haber– digamos de que no se haga uso

del test y se haga un contraste directo –así se resuelve el asunto– me sumaría para hacer un criterio sólido pero, por lo pronto, sostendré el proyecto, aceptando que lo enriquecería con algunos de los razonamientos que han formulado las señoras y los señores Ministros –hablo en plural de las señoras, porque estuvo aquí la Ministra también en la sesión pasada– que pueden fortalecer el proyecto en esa parte. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Nada más aclaro que, en mi caso concreto, sostengo no se debe hacer un test estricto de constitucionalidad, que se utiliza sólo en categorías sospechosas, sino un test de razonabilidad. Mi postura no es que se tenga que hacer un contraste directo porque no creo que haya con qué hacer el contraste directo, simplemente es un test para determinar si la medida es razonable; no el que viene en el proyecto que es para efecto de categorías sospechosas; sería – en mi caso– la única diferencia. Ministra Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Estaría por eliminar el test –para efectos de la votación–. Creo que está planteando la actora la eliminación de la dispensa, lo que estaría afectando es el libre desarrollo de la personalidad de los adolescentes, concretamente, el desarrollo progresivo de su personalidad frente a la protección, el deber del Estado de garantizar el interés superior de la niñez, lo enfrenta la actora al libre desarrollo de personalidad de las y los adolescentes.

Entonces, por eso considero y, al margen de que cada quien pueda opinar, que en el caso prescindiría del test. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A ver, voy aclarar mi postura. Creo que el test que viene en el proyecto, no es adecuado ¿por qué no es adecuado? Porque el test estricto se da en categoría sospechosa, cuando hay una presunción de inconstitucionalidad, cuando se supone que, por las categorías que están en el artículo 1º, cuando se toca una de esas categorías, se entiende que *prima facie* la norma es inconstitucional; entonces, para justificar su constitucionalidad, tiene que pasar un test sumamente estricto; en cambio, el test de razonabilidad es más laxo, lo único que busca demostrar es que la medida es razonable; creo que en su intervención del Ministro Laynez –que ahora me pide la palabra para una aclaración– lo explicó, a eso me refiero y en esos términos voy a votar. Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Además, entiendo que el test de escrutinio estricto, en categoría sospechosa, es porque se va a confrontar un derecho frente a otros derechos de otras personas, porque hay una distinción; lo hemos usado mucho cuando tenemos un problema de igualdad o por discriminación en categoría sospechosa.

Entonces, cuando el legislador hace esas diferencias es donde usamos el escrutinio estricto, para decir: esa diferencia que hizo en esta categoría frente al universo se justifica o no; por eso subrayé que, en este caso, el sujeto es el mismo, el menor de edad, que por una lado se está ponderando la libertad de opción frente a la protección que el Estado le da como menor, por eso no cabe tampoco el test sino, simplemente, el decir cuáles son las medidas, riesgos y perjuicios de permitir un matrimonio de menores y entonces, se enumeran —eso lo hace el proyecto—

hay todos estos riesgos —insisto— y que no es absoluto porque, finalmente, es esperar un tiempo determinado, no es una privación a que pueda contraer matrimonio, es que no lo haga en ese momento y, entonces, eso hace que sea razonable la medida.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: De nada.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ministro Gutiérrez.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Coincido con lo sostenido por usted, Ministro Presidente, en el sentido de que estamos ante un escrutinio de razonabilidad y, por eso, no me pronuncio sobre una norma que pudiera llegar y contener una dispensa; simplemente, estoy analizando esta norma, bajo un escrutinio de racionalidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, Ministro. Ministro Eduardo Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Muchas gracias, señor Presidente. No tenía pensado intervenir, pero ante la abundancia de intervenciones y tratando de coadyuvar con el ponente, para que pueda disectar una mayoría de lo aquí dicho, quiero plantear —de nuevo—, primero, que estoy en desacuerdo con la metodología; segundo, que me parece que no estamos frente a una restricción del derecho al matrimonio, en todo caso, frente a una modalidad y, por consecuencia, no debe examinarse a la luz

de un test de escrutinio estricto, sino en una confrontación frente a las normas convencionales. Es cuanto, estoy a favor del sentido.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Creo que, con esto, el Ministro ponente tiene una idea, bueno —creo que todavía no— señora Ministra Piña.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Brevemente, gracias. No tengo ninguna diferencia en conocer cuando es el test estricto, lo que planteo es lo que establece esta norma: es una prohibición absoluta a la celebración del matrimonio infantil —eso establece la norma—, y tenemos que ver si la existencia de una prohibición absoluta es constitucional y convencionalmente válida, eso lo tenemos que ver.

Dice la actora que no es válida esta prohibición absoluta porque afecta el libre desarrollo de la personalidad de los y las adolescentes, y lo enfocamos al deber de protección reforzada del interés superior del menor. Así está presentado el proyecto. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Muchas gracias. Nada más para precisar e ir a la votación. Aprecio muchísimo las precisiones —las entendí desde el principio—, hice un comentario general de que estaban en contra del test del proyecto y creo que así es, pero aprecio mucho que haya precisado su posición porque otros la han precisado. Lo único que pediría es que en la votación, al manifestarse en el punto, digan si

están en contra, —porque otros no lo han manifestado— de cualquier tipo de test, porque hubo quien dijo que había que hacer un contraste directo —con el mayor respeto digo eso—; entonces, simplemente que digan si están en contra del test o están en contra del test y a favor de un test de razonabilidad, que es —obviamente— uno mucho más flexible. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Ministro. Sírvase tomar votación, secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Estoy a favor del sentido, me aparto de consideraciones, anuncio un voto concurrente, estoy por un escrutinio de racionalidad.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor del proyecto, en contra del test y anuncio también un voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto, con las modificaciones que he aceptado.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Reitero mis argumentos, estoy a favor del sentido del proyecto y, como lo especifiqué hace un momento, no a favor de un test de escrutinio estricto.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del sentido del proyecto, en contra del test de escrutinio estricto y por el análisis bajo la perspectiva del interés superior del menor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Estoy con el sentido y también estoy en contra del escrutinio en sentido estricto, por un test de razonabilidad, pero basado en la ponderación entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad del adolescente y la protección reforzada del interés superior del menor.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Estoy a favor del sentido del proyecto, en contra de un test estricto y de un test de razonabilidad, creo que no es necesario.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el sentido del proyecto, en contra del test de escrutinio estricto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el sentido y en contra de cualquier escrutinio.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, particularmente en contra del test de escrutinio estricto; y creo que este tipo de asuntos se resuelve –eso sucede en la práctica de los tribunales, en la doctrina– mediante un test de razonabilidad.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de diez votos a favor del sentido del proyecto; por lo que se refiere a las consideraciones, el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena vota en contra de consideraciones, en contra de este escrutinio estricto y anuncia voto concurrente, a favor de un escrutinio de razonabilidad; el señor Ministro González Alcántara Carrancá vota en contra del test de escrutinio estricto y anuncia voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: Y a favor del proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: A favor del proyecto, sí; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de consideraciones, en contra, específicamente del.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Y el ponente? Te saltaste.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: El ponente, a favor de su proyecto, con las modificaciones aceptadas.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, Rafa. Me quedé solito, pero cuenta mi voto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro. El señor Ministro Pardo Rebolledo en contra del escrutinio estricto y con base en un análisis del interés superior del menor; la señora Ministra Piña Hernández, en contra de consideraciones, en contra del escrutinio estricto, anuncia voto concurrente y por un test de razonabilidad, pero basado en la ponderación de diversos principios, entre otros, el interés superior del menor; el señor Ministro Medina Mora, en contra de consideraciones y en contra tanto del escrutinio estricto como del escrutinio de razonabilidad; el señor Ministro Laynez Potisek, en contra del escrutinio estricto; el señor Ministro Pérez Dayán, en contra de cualquier escrutinio; el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de consideraciones, en contra del test de escrutinio estricto y por un escrutinio de razonabilidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy bien. Entonces, ¿cómo quedó la votación en cuanto a consideraciones? Me parece que del test de escrutinio estricto hay una abrumadora mayoría, pero.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Mayoría de nueve votos, en contra del escrutinio estricto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí, por eso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Algunos nos pronunciamos por un estándar o test de razonabilidad, como el Ministro Gutiérrez y yo; otros en contra de cualquier escrutinio; entonces, ¿cómo quedó eso?, para ver si hay mayoría en algún sentido.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente. Por lo que se refiere al escrutinio de razonabilidad, con algunas precisiones al respecto, están el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, está también la señora Ministra Piña Hernández; el señor Ministro Laynez Potisek y el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, cuatro votos por razonabilidad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está bien, ¿y los otros votos?

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: En los otros votos, el señor Ministro González Alcántara Carrancá se pronunció en contra del escrutinio estricto; el señor Ministro Franco González Salas a favor del proyecto; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra del escrutinio estricto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Es decir, ¿cuántos votos hay que no comparten ningún escrutinio? Dicho de otra manera.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Estaría primero el señor Ministro González Alcántara Carrancá.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: También estaría en contra.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: También el Ministro Aguilar Morales, nos dice que estaría en contra.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: El Ministro Aguilar Morales, el Ministro Pardo Rebolledo, el Ministro Medina Mora, el Ministro Pérez Dayán; cinco votos en contra de cualquier escrutinio.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Ahora, entre esos cinco votos creo que no hay uniformidad de razones, porque ayer dijo el Ministro Pérez Dayán que la norma era inconvencional y hoy dijo que es convencional, es constitucional; alguien habló del interés superior del niño; alguien habló de contraste directo con la Constitución, algunos no dijeron por qué; entonces, eso es lo complicado cuando se dejan a un lado los test de razonabilidad, ¿con base en qué se va a construir la decisión del engrose? Pues lo dejaremos a la discreción del ponente, que no la tiene nada fácil.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: A ver, señor Ministro Presidente. Entre los que optaron por que no se

estableciera ningún test, sino una comparación directa — insisto— un poco complicada con la Constitución inconvencionalmente, hay diferentes razones, no habría un argumento uniforme; entre los que optaron por el test de razonabilidad hay cuatro votos, ha habido ocasiones en que, cuando hay esta dispersidad, la mayoría que pueda haber sobre un criterio es la que priva.

Cumpliría con mi ofrecimiento de sumarme a una mayoría clara, en este caso, —perdón que lo diga así, pero no hay duda cuál ha sido su posición, inclusive, en los razonamientos— había cinco votos, que creo que podría establecer una mayoría dentro de la mayoría aunque no sea por cinco.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Dentro de la mayoría.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Una mayoría que permitiría construir. Entonces, someto a consideración del Pleno —si están de acuerdo— en que me sumaría —obviamente— con la reserva y haría mi voto particular en este punto, pero para que haya una mayoría para el argumento que pueda regir.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Y los demás elaboramos o elaboran sus votos concurrentes.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Y los demás elaborarían sus votos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entiendo que con cuatro votos, más el suyo del test de razonabilidad, ese sería el argumento.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Así es.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Porque es la mayoría dentro de la mayoría –digamos–, lo que ha dicho mucho el Ministro Gutiérrez en otros asuntos. Perfecto. ¿Están de acuerdo en que así se construya el engrose con la propuesta del Ministro ponente? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

Entonces, tome nota, secretario, para efectos del acta.

Ahora, veremos –supongo que nos iremos con mucha rapidez porque, de alguna manera, ha estado implícito– el punto 3 del capítulo séptimo, que se refiere a los “Conceptos de invalidez relacionados con la violación al libre desarrollo de la personalidad.” Por favor, señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: En relación con este punto, se indica en el proyecto que con la eliminación de la figura de la dispensa para contraer matrimonio no se restringe el libre desarrollo de la personalidad de los menores, sino que, por el contrario, se contribuye a garantizar con mayor seguridad ese derecho.

Asimismo, se advierte que la supuesta necesidad de permitir la existencia de dispensas para que menores de dieciocho años contraigan matrimonio, en que se apoya el *Ombudsperson* local, atiende a casos como cuando se dan embarazos de niñas o adolescentes, o cuando niños o adolescentes embarazan a su pareja, esto es, casos en que, por circunstancias ajenas al libre

consentimiento de los menores, se ven obligados a casarse, ya sea por presiones sociales, familiares o incluso internas, que de manera alguna justifican la necesidad de que se les permita contraer matrimonio.

De ahí que, en estos casos, evidentemente no podríamos hablar de que existe consentimiento de los menores para asumir los compromisos que implica contraer matrimonio, y mucho menos que existe una preparación física, mental y/o económica para hacer frente a las obligaciones derivadas del matrimonio.

Además, la eliminación de las dispensas en cuestión no implica que se vede por completo el derecho que tienen todas las personas para contraer matrimonio, pues la restricción es sólo temporal y concluye una vez que se alcanza la edad de dieciocho años.

En este sentido, la fijación de un límite mínimo de edad para ejercer el derecho a contraer matrimonio, sin la posibilidad de dispensa alguna, no constituye una restricción o modalidad definitiva al derecho que tienen para decidir formar una familia, ni al derecho que tienen los menores a ser escuchados, sino únicamente una protección temporal para que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar, en esa etapa de sus vidas, de los derechos propios de la niñez y de la adolescencia, y tengan oportunidad de desarrollarse plenamente y prepararse para que, una vez alcanzada la mayoría de edad, puedan hacer frente a las cargas que conlleva contraer matrimonio y correlativamente disfrutar los beneficios correspondientes.

También se precisa que la medida legislativa aquí analizada puede tener como efecto liberar a esos menores de las presiones sociales, familiares o incluso internas que, en muchos casos, se ejerce sobre ellos, lo que consecuentemente ayudará a reducir el número de casos de uniones prematuras.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Estimo que es fundado el concepto de invalidez en cuanto a la restricción al libre desarrollo de la personalidad y, en el grado extremo, hasta su obstrucción; el derecho tiene como característica formularse en un lenguaje abstracto y, a partir de esa generalidad, corresponde al aplicador, al operador llevarlo a cada caso concreto.

Una de las reglas máximas del derecho es la posibilidad de adaptar las circunstancias que la norma establece a las particularidades del caso que se plantea.

El concepto abstracto de matrimonio se deduce sólo de la norma secundaria, dado que –como aquí ha quedado claramente establecido– la Constitución eliminó de su texto la expresión, recurriendo sólo a la de estado civil de las personas, –artículo 130– entendida ésta como la situación que tiene cada persona física por sus relaciones de parentesco; ese es el estado civil y que, de alguna manera ejemplificativa, la Constitución ha recurrido a la fórmula de los dieciocho años para contraer obligaciones de manera entendida, y esto se ha llevado al caso concreto de la

legislación para establecer, con absoluta libertad, la edad matrimonial.

La dispensa se convierte, entonces, en la excepción; si la norma mutó para desaparecer la excepción, constituye –a mi manera de entender– una restricción, y esta restricción –necesariamente– habrá de incidir en el libre desarrollo de algunas personas que, estando en el supuesto posible de contraer matrimonio, no lo puedan hacer sólo por la edad. Y es ahí donde el operador cobra la importancia que tenía, como excepción, la ponderación de los elementos que justifiquen abrir la puerta matrimonial en las circunstancias que así lo justifiquen, esto es, teniendo con claridad las consecuencias de un matrimonio temprano, autoriza a su celebración, pues éstas no se van a cometer.

Si es éste –entonces– el razonamiento que me llevó a mi primera intervención, es por ello que –en lo absoluto– permitir este tipo de circunstancias, incluyendo la intervención de un operador jurídico con la capacidad, criterio y certeza de adaptar la excepción al caso concreto, sería desconfiar anticipadamente de la autoridad que puede otorgar la dispensa.

Siempre he participado de la ponderación y, en este sentido, dado que se parte de absolutos, puede ser recurrente la explicación del embarazo, la obligación de casarse, el entorno social, las presiones, pero no todo se reduce a eso, y en tanto no todo se reduce a eso, prever la excepción en el derecho es afinarlo a tal punto en el que se ataje la consecuencia que se busca; impedir y permitir aquella que se vea afectada por la prohibición absoluta.

Y en ese sentido, creo que la norma –como lo expresa el concepto de invalidez– llegará en determinados casos a restringir el libre desarrollo de la personalidad y, por tal circunstancia, creo que el concepto de invalidez es correcto, pues la excepción entregada a quien ejerce una facultad del Estado para discernir sobre la excepción es correcta. Gracias, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Ministro Luis María Aguilar.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Gracias, señor Ministro Presidente. Brevemente. Sólo para reiterar –desde luego– todas estas razones las expresé el día de ayer. Insistir en que –para mí– no hay una categoría sospechosa por el hecho de que se limite por la edad y la posibilidad del matrimonio. Para mí –releo un párrafo nada más–, desde mi perspectiva la fijación de una edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones, constituye una forma de delimitar –y subrayo delimitar– la libertad de formar una familia a través del matrimonio, que tiene por objeto –y esto es lo importante– la protección de los derechos de los niños, frente a lo cual no podría prevalecer la necesidad de otorgar dispensas porque, además, no encuentran sustento en ninguna norma constitucional ni en un derecho humano como tal; básicamente, ese sería mi planteamiento.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Algún otro comentario? Sírvase tomar votación.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor del proyecto, anunciando voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Con el proyecto, con diversas consideraciones.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto, con voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Estoy a favor del sentido del proyecto, no con todas las consideraciones, anticipo voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto en este punto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: En contra, también es fundado el concepto de invalidez.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto, con algunas salvedades; –para mí– basta que se haya resuelto en el apartado anterior que la medida es razonable, para que esto no vulnere el libre desarrollo a la personalidad.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Señor Presidente, si me permite, que tome nota la Secretaría de que voy a hacer un voto concurrente en general de todo el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: De todo el proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente general; la señora Ministra Piña Hernández anuncia voto concurrente; el señor Ministro Medina Mora, en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente; el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, con salvedades.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, secretario. Pasaremos ahora al punto 4 del considerando séptimo, que se refiere a los: “Conceptos de invalidez en los que se aduce violación al principio de progresividad de los derechos humanos.” Señor Ministro Franco.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. En este punto 4 se puntualiza que la limitación en el ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al referido principio pues, para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) Dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) Genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos.

En el presente caso, la disminución, derivada de la evolución que ha tenido el derecho a contraer matrimonio en relación con niños, niñas y adolescentes, tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de diversos derechos humanos, entre los que podemos encontrar el interés superior del menor y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores.

Además, la restricción del caso genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia del derecho a contraer matrimonio que, originalmente, se había considerado accesible para menores de edad.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Hay algún comentario sobre este apartado?

Estoy a favor del proyecto en este punto, pero no comparto las consideraciones; –para mí– la medida no es regresiva, no por las razones que se aducen en el proyecto, sino porque la medida está encaminada a ampliar y a fortalecer la protección de los derechos del niño, especialmente de las niñas; consecuentemente, no creo que haya violación al principio de progresividad. Si no hay algún otro comentario, sírvase tomar votación.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: También con el sentido, considerando –igualmente– que no se trata de una medida contraria a la universalidad y progresividad, sino –al contrario– para ampliar la protección de los niños.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el sentido del proyecto, con voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: A favor del sentido del proyecto, en contra de algunas consideraciones; voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: El concepto de invalidez es fundado, en contra.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el sentido del proyecto, por las razones que expresé.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto; el señor Ministro Aguilar Morales, con salvedades; la señora Ministra Piña Hernández anuncia voto concurrente; el señor Ministro Medina Mora, en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente; el señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, por consideraciones diferentes; y voto en contra del señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, secretario. Pasaremos ahora al punto 5, consistente en “Conceptos de

invalidez relacionados con la afectación a los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio”. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Ministro Presidente. Tales argumentos se desestiman en el proyecto porque, contrario a lo sostenido por la parte actora, los derechos de los menores a obtener alimentos, a la convivencia, a gozar de las medidas de protección por parte de su familia, a la identidad, a obtener un nombre propio, a la nacionalidad, a gozar de la patria potestad, la guarda y custodia y a heredar, entre otros, no derivan ni directa ni indirectamente del matrimonio, sino del simple hecho de ser persona –en específico, niña, niño o adolescente–. El hecho de que un menor sea hijo de padres casados o no en nada afecta sus derechos.

Lo anterior se desprende –entre otros– de los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 y 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8, 27 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño; así como el 36 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establecen de manera clara y enfática que todas las personas son titulares de esos derechos; considerarlo de otra forma nos llevaría a discriminar a quienes nacieron fuera de una relación de matrimonio, sin que exista alguna razón objetiva jurídicamente para ello, lo cual, además,– sería contrario al artículo 17 punto 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.”

Asimismo, se contravendría lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que reconoce el derecho de los menores a no ser discriminados por cualquier condición atribuible a ellos mismos o a su madre o padre.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Está a su consideración. ¿Ningún comentario?, en votación económica consulto ¿se aprueba? Con independencia –entiendo– que hay diversas reservas en cuanto a consideraciones. **(VOTACIÓN FAVORABLE)**

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

En la inteligencia de que la línea argumentativa que han venido llevando cada uno de los integrantes del Pleno, les va obligar a hacer ajustes sobre la argumentación de este apartado. Sí, señor Ministro, dígame.

SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: Sólo una reflexión colateral.

Como lo he planteado, –para mí– esta es una cuestión del derecho a la libertad que tienen o deberían tener las personas para formar una familia; el matrimonio es una de esas formas, pueden ser otras como el concubinato desgraciadamente, el planteamiento del concubinato, que está en el código civil que se combate, no fue impugnado; pero también es otra forma legítima de formar una familia y ahí no se establece ningún rango de edad, ni condicionamiento de ninguna naturaleza. Es solamente una

reflexión quizá para que el legislador estatal pudiera, si así lo considera, tomarlo en cuenta. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Pasaremos, entonces, al último apartado de fondo: “6. Conceptos de invalidez relacionados con la afectación a otros derechos a los que se tiene acceso a través del matrimonio”. Adelante, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Gracias, señor Presidente.

En este considerando, se indica que, si bien es cierto que el derecho a contraer matrimonio trae aparejados diversos beneficios y derechos para los cónyuges, tal y como se ha reconocido en la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 46/2015 (10a.), también lo es que, como ya se dijo, los matrimonios infantiles tienen repercusiones tan graves en el desarrollo de los menores que el mero hecho de poder obtener los beneficios citados resulta insuficiente para justificar que se permita que los menores puedan contraer matrimonio. Máxime que las niñas, niños y los adolescentes, por el simple hecho de serlo, tienen acceso a muchos más derechos y beneficios sociales y familiares que aquellos a que refiere la parte accionante. En este sentido, es el planteamiento del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Está a su consideración. Si no hay ningún cometario, en votación económica consulto ¿se aprueba?, con las reservas que se han venido apuntado. **(VOTACIÓN FAVORABLE)**

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Con independencia de los efectos de votos concurrentes anunciados y la argumentación.

Bien, quedarían, entonces, los puntos resolutivos solamente, ¿verdad, secretario?, que no varían.

Dígame, señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Aquí se presentaría el problema que vimos en el considerando sexto: el legislador hizo desaparecer toda referencia a la emancipación en todo el Código Civil del Estado de Aguascalientes. El 28, que se refería al domicilio del menor de edad no emancipado; el 435, que se refería a que “Los hijos menores de edad no emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley.” El 460, fracción I, que se refería a que “El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue: I.- Por la emancipación” del hijo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra, perdone que la interrumpa. ¿Usted considera que los resolutivos no coinciden con las votaciones alcanzadas?

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Es que es un tema que tenemos que ver antes.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Porque si fuera un tema de efectos, entonces tendríamos que, aunque no lo trae el proyecto, ir

un paso atrás, y entonces decir. Si usted tiene una cuestión de efectos –porque lo cierto es que, de los resolutivos, la costumbre es solamente votar que coinciden, como resultado de las votaciones alcanzadas, no analizamos los resolutivos, en particular cada uno de los artículos–, si usted quiere, podemos ir un paso atrás, si usted tiene objeciones y decir: me parece que no debe alcanzar la invalidez estos preceptos; o ¿cuál es su postura?

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: No, como se había planteado desde ayer, el legislador derogó todas aquellas disposiciones que hablaban de la emancipación; la emancipación no está ligada necesariamente al matrimonio entre adolescentes, que fue de donde derivó.

El legislador de Aguascalientes dijo que derogaba todo lo relativo a la emancipación y así quedó establecido en el proyecto que dijo el Pleno: –ahí me aparté– que el legislador eso quiso hacer, pero lo que hizo fue derogar la emancipación.

Aquí el problema es éste, que creo que es otra cosa muy diferente a efectos. Están impugnados todos los artículos que hablan de la emancipación, concretamente se impugnó este artículo que estuvimos analizando, en razón de que establecía la dispensa, eliminó la dispensa de adolescentes y, en vía de consecuencia, todos los artículos que el legislador incluyó.

Mi duda es –y desde ayer se la planteé y se lo comenté al Ministro ponente–: dentro de esta derogación, el legislador de Aguascalientes derogó artículos que no tenían nada que ver con el matrimonio de adolescentes, los incluyó; esos artículos están

impugnados, no hay conceptos de violación y no tienen nada que ver con el matrimonio de adolescentes, pero son actos impugnados en consecuencia, de oficio, porque es acción de inconstitucionalidad.

¿Vamos a analizar si esa derogación que realizó el legislador de Aguascalientes es constitucional o no? Porque ahorita, al reconocerla ¿esto por qué trasciende? Si reconocemos la validez del artículo que se impugnó, en vía de consecuencia, ¿también vamos a reconocer la validez de diversos preceptos que no tienen nada que ver con el tema que tratamos, y que por un error, el legislador de Aguascalientes, incluyó esa derogación? Ese es mi punto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí tiene que ver con efectos, porque los resolutivos solamente son el resultado de lo que se votó. Si usted tiene una objeción de que se incluyan ciertos artículos, podemos verlo y, una vez que se defina eso, quizás hacer un ajuste previo y meter un pequeño capítulo de efectos y después votar resolutivos, porque —reitero— no es la costumbre discutir los resolutivos en la sesión, porque se entiende que sólo votamos si son resultado o no de las votaciones previas. Ministro González Alcántara.

SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: Me apena mucho, pero también estoy aquí en fase de aprendizaje, y si bien la reflexión que nos hace la Ministra —que respeto mucho y que he aprendido a valorar sus opiniones— me hacen y me obligan a plantear una cuestión que debimos de haber tratado con relación a los efectos, y si bien no se alega, me queda la duda del

concepto y la definición de matrimonio, porque en el Código Civil del Estado de Aguascalientes se define que es la unión de hombre y mujer, y nosotros partimos del matrimonio y no tocamos ese tema, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto; nada más es esa observación y se las comparto. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias, señor Ministro Presidente. Evidentemente, el capítulo de efectos se convierte en parte fundamental de toda sentencia, y es la consecuencia de declarar una invalidez. Me parece que la votación ha sido, en este sentido, por reconocer la validez y, ante una sentencia de reconocimiento de validez, no hay ningún efecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Así es.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Nada más, brevemente. ¿Vamos a reconocer la validez, vía consecuencia, de los demás artículos impugnados sin haberlos estudiado?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A ver, se impugnaron una serie de preceptos, un precepto sobre el cual había conceptos de violación y otros que no. Si se tenían objeciones de que esos asuntos se analizaran, creo que el momento de haber votado en contra fue cuando se precisaron las normas impugnadas; se dejaron por impugnadas todas esas normas, no obstante que no había conceptos de invalidez en su contra; consecuentemente, al

ser válida la norma principal impugnada, son válidas todas las otras normas que se impugnaron en el paquete.

Solamente lo que hace a este tema, no quiere decir que nos estemos pronunciando sobre cualquier otro vicio de invalidez que pudieran tener estas normas que, como bien dice usted, no estudiamos; simplemente, aceptamos que se tuvieran como normas impugnadas, la consecuencia es que le tiene que recaer un resolutivo a esas normas, que aceptamos que se tuvieran como impugnadas y que, a lo largo de toda la discusión del proyecto, nadie objetó que se tuvieran como impugnadas. Por eso, me parece que los resolutivos coinciden con las votaciones alcanzadas. Señor Ministro Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Gracias, señor Ministro Presidente. Solamente para apuntar que, a mi juicio, la única forma de emancipación que contemplaba el Código Civil de Aguascalientes era el matrimonio; por consecuencia.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: No, no es cierto.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Ese es mi punto de vista. – Con mucho respeto–, ese es mi punto de vista.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: También, con mucho respeto, pero tengo los artículos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces, ¿están de acuerdo en que los resolutivos coinciden o son resultado de las votaciones alcanzadas? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Dígame usted, señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Haré un voto particular.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: CON ESTO SE RESUELVE EL ASUNTO.

También anuncio; me reservo un voto concurrente una vez que veamos el engrose.

Quiero expresar mi reconocimiento al señor Ministro ponente por su apertura para poder ir ajustando el proyecto en un tema –sin duda– de la mayor trascendencia, no sólo para el caso concreto, sino como precedente en cuanto al tema que –sin duda es delicado, pero también en cuanto a los criterios de argumentación que se fueron consensuando y discutiendo en este Tribunal Pleno; también agradezco a la señora y señores Ministros su tolerancia y su apertura para poder ir señalando las razones y los argumentos de discrepancia o de aceptación de lo que nos planteaba. Señor Ministro ponente.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Quisiera refrendar el ofrecimiento –si no tiene inconveniente la Presidencia– a la Ministra y a los Ministros de que, una vez que tenga acceso tanto a la recopilación que el señor secretario –por instrucciones de la Presidencia– va a hacer de las votaciones como de los votos concurrentes que, en su caso, haya, pueda elaborar el engrose con la mayoría de los argumentos que se

sumen a las mayorías construidas, y se pueda poner a disposición para que se vea en una sesión privada, dada la importancia del asunto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Están ustedes de acuerdo en que el engrose lo veamos en una sesión privada? **(VOTACIÓN FAVORABLE)**

Y más que –quizá– los votos, les pediría que le manden al Ministro ponente los argumentos, para que él pueda hacer el engrose.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Lo apreciaría mucho.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Una vez que tenga el engrose, podamos ver qué había mayoría, qué no, y podamos hacer nuestros votos concurrentes, particulares o de cualquier otro tipo. Entiendo que no hay ningún otro asunto listado para el día de hoy, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Ninguno, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muy bien. Gracias, secretario.

Voy a levantar la sesión, convocando a la señora y señores Ministros a la próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el jueves, a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13:20 HORAS)